INFORME SECRETARIAL: Villavicencio, 16 de marzo de 2023, al Despacho de la señora Juez el proceso Ejecutivo Laboral No. 2006-00036, informando que venció el término de traslado de la nulidad propuesta por el apoderado del ejecutado, dentro del cual se guardó silencio y no hay pruebas por decretar. Sírvase proveer.

DIVA ALEXANDRA MOSOS RAMOS
Secretaria

**DISTRITO JUDICIAL DE VILAVICENCIO
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE VILAVICENCIO**

Radicación: 500013105002 2006 00036 00

Villavicencio, dieciocho (18) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Ref.: Proceso Ejecutivo Laboral promovido por Paulina Pinilla contra William Ferney Aljure Martínez.

Visto el informe secretarial que antecede, se tiene que habiéndose corrido traslado de la solicitud de nulidad incoada por el apoderado del ejecutado **WILLIAM FERNEY ALJURE MARTINEZ**, la parte actora guardó silencio y el incidentante no solicitó pruebas, por lo que, a continuación, se procederá a resolverla.

En efecto, el apoderado del ejecutado **ALJURE MARTINEZ** solicita la nulidad de lo actuado desde el mandamiento de pago por cuanto considera que ha existido una indebida notificación de dicha providencia, por ende, se configuró la causal 8ª del artículo 133 del Código General del Proceso.

Luego de hacer un recuento de lo sucedido en el expediente con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia en el proceso declarativo, concluye que erró el Despacho al indicar que la notificación del mandamiento de pago se efectuó por los lineamientos del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la norma especial contenida en el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que debe ser de manera personal, puesto que se trata de la primera providencia que se dictó en el proceso ejecutivo laboral.

Indica igualmente, que acorde con el artículo 101 y 102 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme, y que solicitado el cumplimiento por el interesado y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento el juez decretará inmediatamente el

embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de la ejecución.

Con base en lo anterior considera que contrario a lo señalado en auto del 30 de junio de 2022 a su poderdante no se le ha notificado el mandamiento de pago del 9 de noviembre de 2007, pues de acuerdo con el artículo 108 ya citado esta providencia se le debe notificar de manera personal, lo cual no ha ocurrido hasta el momento.

Finalmente, manifiesta que la falta de notificación personal del mandamiento de pago a su cliente constituye una flagrante vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, pues no ha podido ejercer su derecho de contradicción y defensa.

El artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece las causales de nulidad de la siguiente forma:

“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7....

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquiera otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado....”.

Como se sabe las nulidades procesales están erigidas para salvaguardar las formas procedimentales indispensables dentro del juicio, correspondientes a la necesidad de un debido proceso de rango Constitucional, y no persiguen otro fin que servir como garantía de justicia y de igualdad; es decir, que el ideal último no es el formalismo como tal, sino la preservación de estas prerrogativas. Es así, como se encuentran fundadas sobre los axiomas de la especificidad, protección y convalidación, conforme a los cuales sólo serán causales capaces de afectar de invalidez la actuación procesal, aquellas específicamente consagradas por el legislador, existen para proteger a la parte que se le hubiere conculcado su derecho por razón o con ocasión de la actuación irregular, y desaparecen o sanean como consecuencia del asentimiento expreso o tácito de la parte afectada con el vicio, para dejar sin efecto una parte o todo el proceso, cuando se han violado las

formalidades que se requiere para su formación, cuyas causales están taxativamente enlistadas en el art. 133 del Código General del Proceso, normativa aplicable por remisión analógica del art. 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Al punto, refiere el apoderado judicial que en el presente asunto se ha configurado la causal 8ª del citado artículo 133 del Código General del Proceso, al no haberse practicado en forma personal la notificación del mandamiento de pago, conforme lo dispone el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, norma expresa para los casos de ejecución en materia laboral.

Sin embargo, disiente esta operadora judicial de lo anterior, como quiera que en el proceso de la referencia una vez proferida la sentencia escritural el 9 de marzo de 2007, ante la petición de librar mandamiento de pago elevada por el apoderado de la activa, se procedió a expedir el respectivo auto el 9 de noviembre de 2007, dando aplicación a los postulados del artículo 335 del entonces Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 35 de la Ley 794 de 2003, teniendo en cuenta que la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto en esta última codificación no existe norma expresa y exclusiva que regule el trámite de la ejecución de una sentencia a continuación del proceso declarativo que inicialmente se haya promovido para la declaratoria de la existencia de derechos a favor del trabajador, y por ello, ésta providencia se notificó conforme a lo estipulado en dicha norma, sin que dicha norma pueda escindir.

En este punto vale hacer claridad, que si bien es cierto en el mandamiento de pago librado el 9 de noviembre de 2007 no se indicó la forma de notificación de esa providencia, también lo es que, mediante auto del 30 de junio de 2022, mediante el cual se dispuso seguir adelante con la ejecución, se hizo hincapié en cuanto a la notificación mediante anotación en estado de ella, habida cuenta que la petición de ejecución de la sentencia proferida se hizo dentro de los sesenta (60) días contemplados en el artículo 335 del entonces Código de Procedimiento Civil.

El Despacho igualmente debe precisar que los postulados de que tratan los artículos 100 y siguientes del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son aplicables única y exclusivamente a aquellos procesos que desde el inicio son radicados como procesos EJECUTIVOS y no a aquellos que se generan a continuación del proceso declarativo (ORDINARIO), como es el asunto materia de decisión.

Adicionalmente, no ha existido la vulneración al debido proceso invocada por el apoderado del ejecutado **WILLIAM FERNEY ALJURE MARTINEZ**, puesto que al proceso se le dio el trámite correspondiente, acorde con las normas que rigen el procedimiento de los juicios laborales y la ejecución de la sentencia a continuación del proceso ordinario, acorde a la remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Al respecto, nuestro superior, la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial, en providencia del 3 de diciembre de 2013, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandado **JIMMY JAVIER CESPEDES BAQUERO**, dentro del proceso EJECUTIVO LABORAL 500013105002-2002-00173-02, adelantado en este mismo despacho por **TITO PINILLA CAJAMARCA**, iniciado a continuación del proceso declarativo y donde se solicitó similar nulidad expresó:

“...Advierte la Sala, que el problema jurídico a resolver, se concreta en dilucidar si la notificación del mandamiento de pago que se libra dentro del proceso ejecutivo laboral promovido a continuación del proceso ordinario, se debe realizar al ejecutado por anotación en estado o de manera personal.

Sobre el particular, es oportuno precisar que si bien el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en sus artículos 101 a 111, regula el procedimiento que debe seguir el proceso ejecutivo laboral, en dicho estatuto de procedimiento laboral, no existe una norma que señale cómo se debe efectuar la notificación del mandamiento de pago en los procesos ejecutivos iniciados a continuación de un proceso ordinario, en donde el título ejecutivo consiste precisamente en la sentencia que puso fin al litigio, como sí ocurre en el ordenamiento procesal civil.

Es de advertir que el artículo 108 del Código Procesal del Trabajo, tan sólo resulta aplicable en los casos en que se inicie autónoma e independientemente el proceso ejecutivo y no cuando el mismo sea el resultado de un proceso ordinario previo. En este último caso, como no existe normatividad especial en el régimen procesal laboral y tampoco se encuentra norma que regule el mismo fenómeno judicial para aplicarla analógicamente, es indispensable acudir al Estatuto Procesal Civil (C.P.C. art. 335), normatividad aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En efecto, respecto de los procesos ejecutivos iniciados a continuación de un proceso ordinario, donde el título ejecutivo consiste precisamente en la sentencia que puso fin al litigio, el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, establece que, el mandamiento de pago se notificará a las partes, a través de anotación en estado, si la ejecución se adelanta dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.

De igual forma, señala la citada norma que, si la solicitud de librar mandamiento de pago, no se realiza dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obediencia a lo resuelto por el superior, la notificación se hará en la forma prevista en los artículos 315 a 320 y 330.

En ese orden de ideas, es el término de los sesenta días el que determina la clase de notificación que debe hacerse del mandamiento aludido, esto es, por estado si dentro de dicho término que se hace la solicitud aludida o, de manera personal,

conforme a las previsiones de los artículos 108, 29 y 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, si la petición se hace por fuera del mismo....”

Decisión que se sustentó en auto proferido por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en providencia del 1° de diciembre de 2004, quien en su oportunidad precisó:

“En atención a las anteriores reseñas jurisprudenciales, encuentra la Sala que la actuación surtida por el juez de primera instancia para la notificación del mandamiento ejecutivo, no está viciada de nulidad, pues a la misma se le impartió el trámite que legalmente le correspondía, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que gobiernan el procedimiento de la ejecución de la sentencia, a continuación del proceso ordinario...”

Por consiguiente, no le asiste razón al recurrente al insistir en la indebida notificación del mandamiento ejecutivo y en la existencia de nulidad en la práctica de la misma, por ende, la decisión objeto de apelación merece ser confirmada...”

Por todo lo anterior, se denegará la solicitud formulada, no sin antes mencionar, que el demandado ha conocido la existencia del proceso desde el inicio de esta controversia jurídica ha mostrado desinterés, puesto que a pesar de que el 26 de julio de 2006 se le notificó personalmente el auto admisorio de la demanda ordinaria instaurada en su contra por la señora **PAULINA PINILLA**, haciéndole entrega de copia de la demanda, dentro del término legal para ejercer su derecho de contradicción y defensa, guardó silencio, por lo que, se tuvo por no contestada la demanda mediante auto del 29 de septiembre de 2006; no asistió a las audiencias programadas por el Despacho, al punto que en la segunda audiencia de trámite, en la cual debió comparecer a absolver interrogatorio de parte se concedió el término legal para que justificara su inasistencia, dentro del cual guardó silencio; de donde se colige que el demandado hoy nultante conocía la existencia del proceso el cual pretendía la declaratoria de algunos derechos en favor de la actora, por lo que, debió estar atento de todas las instancias, bien fuera personalmente o a través de un apoderado.

Sin embargo, concurre con ocasión de las medidas cautelares, al verse afectado sus ingresos, argumentando una presunta nulidad por indebida notificación, cuando dicho acto ya se había surtido con fundamento en las normas procesales, las cuales son de obligatorio cumplimiento y preclusivas, garantizándose así su derecho de contradicción y de defensa, cosa diferente es que hubiere actuado de manera pasiva, como ya se describió.

En otro asunto, la ejecutante solicitó el decreto de medidas cautelares sobre los dineros que, en cuenta corriente, de ahorros y CDT tenga el demandado en las entidades financieras relacionadas en el memorial petitorio, la cual habrá de ser denegada, como quiera que no se cumplió con lo previsto en el artículo 101 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de prestar juramento sobre la denuncia de bienes.

Consecuente con lo anterior, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio,

RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la nulidad propuesta por el apoderado judicial del ejecutado **WILLIAM FERNEY ALJURE MARTINEZ**, acorde a lo considerado.

SEGUNDO: DENEGAR el decreto de la medida cautelar incoada por el apoderado del ejecutante, conforme a lo considerado.

TERCERO: ADVERTIR que la presente decisión se actualizará en el aplicativo Justicia Siglo XXI y puede ser consultada en la página de la Rama Judicial en el link de consulta de procesos y en los estados electrónicos, en este último podrá visualizar el contenido de la providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DIANA MARÍA GUTIÉRREZ GARCÍA
Juez

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO

La anterior providencia fue notificada en el
ESTADO N°098 de fecha 19 de julio de 2023

Secretario _____

Firmado Por:
Diana Maria Gutierrez Garcia
Juez
Juzgado De Circuito
Laboral 002
Villavicencio - Meta

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **88135f59638e61dc636af03a93f60fae89e5199f2fcffde8cb76a7fe5ae27c1c**

Documento generado en 18/07/2023 03:33:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>